LA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE 1917 Y SU PECULIAR VINCULACIÓN CON EL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SIGLO XXI

THE MEXICAN CONSTITUTION OF 1917 AND ITS PECULIAR
RELATIONSHIP WITH THE LAW OF SOCIAL SECURITY
OF THE 21ST CENTURY

Ángel Guillermo RUIZ MORENO*

RESUMEN: Una de las glorias del Constituyente de 1917 fue plasmar a nivel constitucional el ahora derecho humano a la Seguridad Social, propiciando un fenómeno global: el constitucionalismo de la Seguridad Social. La Declaración Universal de los Derechos Humanos vincula al Estado Mexicano a prestar el servicio público de Seguridad Social, lo que obliga a plantearnos su actual trascendencia.

PALABRAS CLAVE: Seguridad Social; constitucionalismo; deslaboralización; servicio público; tratados internacionales.

ABSTRACT: One of the glories of the Constituent Assembly of 1917 was to shape at the constitutional level the now human right to Social Security, fostering a global phenomenon: the constitutionalism of Social Security. Universal Declaration of Human Rights, links the Mexican State to provide the public service of Social Security. This forces us to think about its current transcendence.

KEYWORDS: Social Security; Constitutionalism; Delaboration; Public Service; International Treaty.

* Doctor *cum laude* en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad CEU-San Pablo. Investigador Nacional Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Profesor Investigador Titular de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Coordinador del Doctorado en Derecho y Director de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas, de la UdeG. Presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social (AMDTPS). Presidente Internacional de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 'Dr. Guillermo Cabanellas' (AIJDTSSGC).

Fecha de recepción 7 de noviembre de 2016, fecha de aprobación para su publicación 20 de febrero de 2017.

SUMARIO: I. *Acerca del Derecho Constitucional, en el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.* II. La seguridad social entendida como un derecho humano. III. El reconocimiento Constitucional de acceso a la seguridad social. IV. Breves conclusiones.

Si la Seguridad Social no existiera habría que inventarla; y si la que tenemos no nos sirve como debería hacerlo, entonces habrá que reinventarla. Ya es hora de reestructurarla en México.

Ángel Guillermo Ruiz Moreno

I. ACERCA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL,
EN EL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917

Resulta siempre fascinante abordar el polémico tema de las Constituciones Políticas nacionales, en especial a partir de las diversas teorías que lenta pero inexorablemente se han ido integrando a lo largo de la historia de la ciencia jurídica, y que han pasado del iusnaturalismo al iuspositivismo, para volver al actual neo iusnaturalismo en nuestro Derecho mexicano, observable éste a partir de la trascendente reforma y adición efectuada el 10 de junio de 2011 al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), lo que transformara nuestro paradigma jurídico con el reconocimiento pleno de los derechos humanos.

La Constitución Política nacional y por consecuencia lógica el propio Derecho Constitucional que la estudia, es una disciplina jurídica clave en cualquier país que se precie de tener Estado de Derecho y para el futuro de la nación entera; por ello, en este ensayo breve no es factible abordar a fondo la temática constitucional por simples razones de espacio y pertinenciametodológi-

cas. Sin embargo, el que esto escribe, cultor desde hace ya cuarenta años del Derecho Social, con la esperanza de que se cambie un poco el tradicional enfoque de los abogados constitucionales y que algunos lectores puedan descubrir datos interesantes enlazados con el cuasi olvidado Derecho de la Seguridad Social, y con la idea de queles motive a reflexionar sobre la materia, nos arriesgaremos a efectuar algunas referencias propedéuticas que consideramos válidas y oportunas en este momento crucial de cambios normativos estructurales en México.

Pues bien, analizado propedéutica y objetivamente desde la óptica jurídica, sin duda el Derecho Constitucional es una disciplina compleja y harto evolutiva, la que por su importancia y trascendencia suele reunir en su seno al más selecto grupo de doctrinistas jurídicos, y más ahora, a un siglo de distancia de la promulgación de nuestra actual CPEUM cuando celebramos el Centenario de su existencia.

No obstante, deberemos comenzar a reconocer, de entrada, que en el fondo no es la misma pues hasta la fecha en que esto se escribe –cuando por cierto se está discutiendo en el Congreso de la Unión la reforma al ya mítico artículo 123 de nuestra CPEUM, blasón de orgullo de nuestro Derecho Social en el mundo entero–, ha sufrido ya alrededor de 700 reformas o adiciones a su texto original, por lo que no es igual la vigente a la promulgada en Querétaro el 5 de febrero de 1917; todo ello, claro está, debido precisamente a la constante evolución de la sociedad a la que rige.

Cierto, ya lo sabemos pero conviene recordarlo ahora, que la Constitución Política es la ley fundamental de la organización de un Estado, donde el denominado constituyente originario, en representación del pueblo, ha determinado no sólo la forma y sistema de gobierno, sino también su organización, su ideario, las facultades y obligaciones de los poderes públicos a través de los cuales se ejerce la soberanía, así como la razón de ser de un

país.

Es precisamente en ese conjunto de disposiciones básicas de cualquier Estado nacional, con independencia de las formas de éste o la ideología que permea en su gobierno, donde se reúne la voluntad popular que delinea el tipo de nación a la cual se aspira, mediante el establecimiento de normas fundamentales que van, desde las atribuciones u obligaciones y los límites de actuación de la autoridad (la que en base a un principio jurídico universal sólo puede hacer lo que la ley expresamente le autoriza), como también se puntualizan los derechos y prerrogativas, y las cargas u obligaciones de los gobernados, plasmándose en la Constitución Política los derechos y las garantías, tanto individuales como sociales del gobernado (quien entonces puede hacer todo aquello que no le esté prohibido, en base al principio jurídico universal correlativo al anteriormente referido).

Es por eso que una Constitución política nacional es la “ley suprema” o “ley de leyes”, al contener dicho cuerpo legal de mayor jerarquía una serie de normas taxativas de orden público e interés social que deben observar y respetar todos los habitantes de un país, ya sean gobernantes y gobernados, nacionales o extranjeros residentes o en tránsito.

Así, en la propia Constitución se encuentra el basamento de todo el sistema jurídico de un país, y de su articulado se deriva el resto de la legislación nacional, esto es, la normativa formal tanto las leyes reglamentarias de sus preceptos, como también los códigos de diversa índole—civil, penal, mercantil, etc.—; además de las legislaciones ordinarias en todas las diversas materias jurídicas e incluso, en un país federal como el nuestro, se expresan los lineamientos que deben de cumplir las Constituciones de las diversas entidades federativas que, a pesar de su aparente “soberanía”, no pueden contravenir en sus disposiciones las expresadas en la propia Constitución federal y por ende deben observar las limitaciones en ella impuestas.

Luego, como consecuencia de tal actividad legislativa, con la finalidad de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes nacionales, surge la actividad ejecutiva del Estado, expresada normativamente en los estatutos orgánicos vigentes en razón de la materia o del territorio geográfico, al igual que en los reglamentos federales o estatales e incluso municipales, entendidos aquí como normatividad material, amén de las circulares o acuerdos que son eso: disposiciones específicas de carácter administrativo que tampoco pueden rebasar ni desatender la normatividad de la Constitución federal.

Y finalmente, a manera de equilibrio de los poderes públicos legislativo y ejecutivo, el poder judicial se hará cargo de velar por la supremacía de la Carta Fundamental y será el principal operador en la impartición de justicia.

En razón de ello, ubicados en la corriente jurídica del iuspositivismo y siguiendo al jurista vienés Hans Kelsen, en la base misma de una figurada “pirámide jurídica” que sostiene todo el entramado normativo, encontraremos a la Constitución Política, de la que se derivada la normatividad restante nacional, bien sea la de índole formal (la expedida por el Poder Legislativo de cada país), o bien la de índole material (la reglamentaria que expide el Presidente de la república o los Gobernadores de las entidades federativas, dirigida a proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de dicha legislación formal).

De manera que, tal normatividad jurídica, sin excepción —e incluso como un requisito sine qua non de validez y de legitimidad sociales—, deberá ceñirse siempre, forzosamente, al imperio de la norma Constitucional superior en jerarquía, pues en caso de contravenirla o inobservarla dicha normatividad sería inconstitucional (porque no se ajusta a sus disposiciones o las rebasan), o bien serán anticonstitucionales (al contravenir abiertamente la disposición contenida en la Carta Fundamental nacional que pretenden regular).

Tal inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad, será determinada siempre por el tribunal supremo del poder judicial nacional, competente para analizar y resolver esta polémica cuanto compleja problemática, ubicándonos en la clásica división de poderes. Así, tendrán a su cargo estos tribunales constitucionales, al través de resoluciones colegiadas inatacables, la función importantísima de interpretar y determinar si se contraviene e inobserva las disposiciones constitucionales vigentes, o si se vulnera o viola cualquier derecho del gobernado en algún caso concreto. La idea subyacente es que se respete siempre, en todo tiempo y lugar, el denominado Estado de Derecho.

Así las cosas, una Constitución Política es la base de ese constructo jurídico que denominamos “Estado” que es —desde el particular punto de vista de quien esto escribe—, la mejor aportación de la ciencia del Derecho, porque a fin de cuentas el Estado es eso: una grandiosa construcción jurídica.

Y entonces, como en la aludida “ley de leyes” es donde se plasman los derechos y las prerrogativas de los gobernantes y los gobernados, al igual que las competencias o funciones propias de los poderes e instituciones públicas, sucede que la CPEUM se convierte pues en el instrumento jurídico nacional base, la garante del orden público establecido y de las instituciones que legítimamente de ella emanan, hasta el punto de que no puede entenderse la existencia de cualquier nación del planeta que no tenga una Constitución que le funde u oriente.

Tal normatividad básica, también habrá que decirlo, prima por sobre cualesquier otro instrumento jurídico existente y vigente, aunque siempre en el entendido de que dichas disposiciones constitucionales se complementan con las disposiciones de los Tratados Internacionales signados por los órganos competentes para hacerlo —salvo que su normativa expresa establezca lo contrario—; todo ello atento a lo estatuido en el texto mismo del reformado y adicionado artículo 1° de la CPEUM que, lo

reiteramos, constituye la base de un nuevo paradigma jurídico en nuestro país, hasta el punto que para interpretar de manera más sistematizada los alcances de la crucial reforma efectuada en materia de los derechos humanos en México a mediados de 2011, nuestra máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con el Consejo de la Judicatura Federal, resolvieron abrir la Décima Época de criterios de Jurisprudencia a partir del 4 de octubre de 2011.

En este punto, resulta obvio que los Tratados Internacionales sólo podrán celebrarse entre naciones cuando así lo contemplan los propios mecanismos de su propia Constitución Política, pues para que formen parte integrante del entramado jurídico nacional las normativas internacionales—ya sean Tratados, Convenios o Pactos—, jurídicamente deberá existir un procedimiento expreso previsto en la propia norma constitucional.

Pongamos para entenderlo mejor un ejemplo claro: en el caso de los Convenios Internacionales emanados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), respecto de los cuales en base a la soberanía de cada país puede o no reservarse el cumplimiento u obsequio de algunos de los aspectos específicos que dichos Convenios contengan de manera genérica, se puede nacionalmente delimitar no solo la parte que a la luz del principio de convencionalidad cobrará vigencia nacional, sino incluso hasta la intensidad de su obligatoriedad; siendo éste por desgracia un tema casi inexplorado todavía en México, al retornar a la corriente doctrinal del neo iusnaturalismo.

Empero, también habrá que señalar que una norma constitucional no es para siempre, porque en la realidad el Derecho debe adaptarse siempre a la evolución natural y a la realidad nacional. Por eso, aunque celebremos ahora el Centenario de nuestra CPEUM de 1917, debemos comprender que dicha Constitución que nos rige, no fue la primera Carta Fundamental de los mexicanos, ni tampoco su actual texto es el mismo que

concibiera el Constituyente Originario, debido esto a la intensa actividad reformadora efectuada por el denominado constituyente permanente con el decurso de los años.

La razón subyacente en ese complicado tema —que por desgracia la enorme mayoría de los mexicanos ignora—, es que la evolución natural de las sociedades ha llevado a la propia normativa jurídica a evolucionar a la par que lo hace la colectividad nacional, cuya coexistencia pacífica y ordenada pretende regular; de manera que no han sido ni serán siempre las mismas normativas las que se hallen vigentes porque, al paso del tiempo y por multiplicidad de razones de toda índole, debe modificarse el marco Constitucional de un país. Al respecto, el tratadista Jorge Carpizo sostenía:

Una Constitución puede ser la ruptura total, o casi total, del orden jurídico anterior, o bien representar una evolución jurídico-política respecto de su antecesora; entre estos dos extremos, en la realidad, se dan los más diversos matices.

Cabe añadir a dicho comentario algo que no es un tema menor: al menos teóricamente, como la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo —así se ejerza dicha soberanía al través de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial— lo cierto es que como todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, entonces en todo tiempo tendrá el pueblo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno y las instituciones públicas al través de una reforma constitucional, una vez seguido el procedimiento contemplado, en nuestro caso, en la propia CPEUM.

Porque el verdadero Estado de Derecho en un país sólo puede ser alcanzado cuando todo el marco jurídico normativo existente —el que interactúa en cualesquiera de los diversos órdenes y competencias nacionales, y a veces hasta internacionales—, está ajustado al marco Constitucional imperante, pues sólo así podrá

ser aplicado u observado por todos, máxime cuando entendemos que una norma jurídica, por más suprema que sea, no cambia la dura realidad sino que únicamente la regula. Ello sin dejar de mencionar aquí que tampoco hay derechos absolutos —ni siquiera en materia de los derechos humanos, donde puede haber colisiones entre ellos— pues todos los derechos tienen límites.

Por último, para concluir con este apartado que merecía la pena recordar, afirmamos que si bien la normativa legal tiene como características primordiales el ser general, abstracta, obligatoria y coercible, no obstante ello, su eventual observancia y aplicación requiere de una enorme coherencia, sensatez y legitimación social. Después de todo, se ha dicho que las normas Constitucionales son más un Derecho viviente que simple Derecho vigente, pues es más importante su correcta aplicación en la vida real que la observancia de la norma escrita.

Una vez sentado todo lo anterior, vayamos enseguida al par de temas de fondo que deseamos abordar en este breve ensayo jurídico.

II. LA SEGURIDAD SOCIAL ENTENDIDA COMO UN DERECHO HUMANO

Pues bien, el reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la seguridad social existe a lo largo y ancho de toda América Latina y en prácticamente todos los países del mundo, por tratarse de una obligación a cargo del Estado el otorgar este servicio público contemplado por su grandiosidad no en uno sino en dos artículos: el 22 y el 25 de la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» (DUDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por su enorme pertinencia en este tema, toda vez que allí se establecen con meridiana claridad no sólo la obligación y responsabilidad originaria de los Estados miembros de la ONU acerca de la implementación de este servicio público, sino también el carácter de derecho humano inalienable, irrenunciable e inextinguible del servicio público de la seguridad social entendido aquí como derecho humano —incluso describiéndose en qué debe consistir dicho servicio público, y volviéndole por lo tanto un derecho social exigible al Estado—, resultará necesario analizar enseguida el texto de ambos preceptos:

Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 25. Todos tenemos derecho a un nivel de vida adecuado, que asegure a nosotros y a nuestra familia, la salud, el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tenemos, asimismo, derecho a seguro en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de nuestros medios de subsistencia por circunstancias ajenas a nuestra voluntad.

Tanto la madre que va a tener un hijo, como su hijo, deben recibir cuidado y asistencia. Todos los niños tienen los mismos derechos, esté o no casada la madre.

De su atenta lectura y cabal comprensión, el lector comprobará sin dificultad la enorme trascendencia e importancia de que el servicio público de la seguridad social sea un derecho humano, en especial bajo a la luz de los principios pro persona y de convencionalidad derivados del artículo 1º de nuestra CPEUM.

Comencemos pues comprendiendo la temática de los derechos humanos.

Para Jesús Rodríguez y Rodríguez, por derechos humanos se entiende:

El conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluso los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado individual y colectivamente.

Nosotros estamos totalmente de acuerdo con ello, aunque se añade que no existe una definición universalmente aceptada acerca del tema de los derechos humanos; sin embargo, para visualizarlo de mejor manera, exploremos otros intentos conceptuales que consideramos también de enorme pertinencia.

Al respecto, de manera propedéutica sostiene el experto jurista ibérico Antonio Pérez Luño, que los derechos humanos son:

Un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, de la libertad, de la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.

Y por su parte, el jurista argentino Marcelo Richter aduce con razón que:

Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad humana. Son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. A los Estados les corresponde respetar, promover y proteger efectivamente los derechos humanos.

Así pues, de las opiniones vertidas caeremos en cuenta que tal y como ocurre con todo derecho —sea éste humano o fundamental, individual o social—, si alguien es su beneficiario o titular

del mismo, entonces forzosa y necesariamente deberá haber un sujeto obligado a respetarlo y cumplirlo, y dicho sujeto obligado, en caso de ser inobservado o violado ese derecho, estará obligado a su reparación porque tal derecho, en el caso específico de los derechos humanos, es inherente a la propia condición humana y por ende sigue a los individuos en todo tiempo y lugar, incluso más allá de su condición migratoria pues migrar también es un derecho humano contemplado en el artículo 13 de la DUDH.

En tal escenario y bajo tal argumentación, resulta obvio concluir que el servicio público de la seguridad social lo debe otorgar el Estado a todos sus habitantes sin distingo alguno, por tratarse de un derecho humano esencial que se insiste es inherente a la frágil condición y naturaleza humanas, debiendo todos los Poderes y autoridades promoverlos, protegerlos, garantizarlos y repararlos.

Tales derechos humanos —siempre más allá de disquisiciones filosóficas o doctrinarias—, se hallan proclamados como tal desde hace más de seis décadas en la citada DUDH, porque este vital documento de calado mundial resulta ser parte sustancial de la construcción del llamado “nuevo constitucionalismo social” —en buena medida programático y condicionado siempre a la voluntad política en cuanto a inversión social se refiere— provocando así un renovado constitucionalismo que florece por doquier y que en nuestro mundo globalizado en todos los órdenes, ha sido recogido ya en los propios textos constitucionales.

Sin embargo, cabría al respecto formular una inquietante pregunta: ¿cómo contribuye la DUDH a ése nuevo constitucionalismo social, el que hoy día es muy distinto del que floreciera en la segunda década del siglo XX en nuestra centenario CPEUM?

La interrogante planteada no es un tema menor, sino por el contrario, es de la mayor relevancia jurídica. Porque a un si-

glo de distancia, debemos ser congruentes con la dura realidad de la segunda década del siglo XXI y entonces, si tenía razón el genial Albert Einstein cuando afirmaba puntilloso que: “Lo importante es no dejar de hacerse preguntas... la pregunta en el ámbito científico es siempre más importante que sus posibles respuestas”, entonces la pregunta antes formulada es de suma trascendencia intentar responderla jurídicamente.

Hablemos pues acerca de la DUDH y argumentemos tanto la fuerza moral como jurídica de dicho instrumento internacional —el que por cierto es muchísimo más que una simple “Declaración” a pesar de denominarse así—; lo haremos de forma sintética enseguida, en diez puntos clave e irrefutables, en los que le escudriñaremos histórica, metodológica y sistemáticamente a partir de su origen:

- Comenzaremos diciendo que el 10 de diciembre 1948, en París, fue aprobado su texto al seno de la Asamblea General de la ONU, participando en dicha sesión representantes de 50 Estados Miembros —incluido México—, quienes sabían de la difícil tarea de elaborar un solo texto ante la amplitud y trascendencia del tema, para lo cual se había formado una Comisión para su redacción final, redacción que tardó en hacerse en su tramo final durante al menos un par de años, en un momento crucial para el planeta debido a que tras la Segunda Guerra Mundial se hallaba dividido el mundo en dos bloques: el oriental y el occidental. Por lo tanto, la redacción final de tal documento, en un tema que desde entonces se consideró fundamental para la humanidad —aunque se trate en esencia de una Recomendación no vinculante en base a los usos del Derecho Internacional Público—, fue una ardua labor a cargo de la Comisión nombrada para su redacción encabezada por Eleanor Roosevelt, y en la que participaron personajes de la talla de René Cassin, Stéphane Hessel, y otros más.
- La DUDH contiene valores morales universales, que son in-

herentes a la especie y a la frágil condición humana en un mundo riesgoso, tales como: el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la libre elección en diversos temas, o a la no discriminación, el pleno derecho de acceso a la justicia y a la dignidad, a la igualdad y la equidad entre todas las personas, entre otras muchas cosas. Debemos precisar que el amplio catálogo de derechos básicos, ya expresos o ya inferidos, que constan en el texto de la DUDH, no sólo son de índole individual sino también sociales, los que en razón de su propia naturaleza intrínseca son: inalienables (no son negociables), irrenunciables (nadie puede renunciar a ellos bajo ninguna circunstancia), y son inextinguibles (nunca precluye el derecho a su acceso), derechos humanos que se adquieren por el simple cuanto trascendente hecho de ser persona.

- Ahora bien, en materia de la seguridad social, se convierte la DUDH nada menos que en fuente formal del Derecho de la Seguridad Social internacional y, a la par, del Derecho nacional debido fundamentalmente a su enorme fuerza ética y moral, al establecer parámetros que luego se utilizarían para otros pactos o convenciones internacionales de la materia; la obligada protección social obligatoria que se deriva del documento referido, al hallarse en juego la dignidad de vida a que tiene derecho todo individuo, devienen en inexcusable el otorgamiento de este servicio público protector a todos los habitantes de un país, sin excepción ni discriminación alguna, respecto de contingencias socio-vitales a las que todos estamos expuestos en cualquier momento y que por lógica deberían estar previstas en cualquier sistema integral de seguridad social: salud, vivienda, pensiones, subsidios, ayudas, prestaciones sociales diversas, etc. Por lo tanto, es una obligación inexcusable del Estado nacional planificar e instrumentar las medidas necesarias para otorgarlas a sus habitantes, al través de los seguros sociales creados específicamente para brindar este servicio público que, por cierto, no es gratuito, lo cual le distingue de los sistemas asistencialistas de la protección social genérica.
- Lamentablemente, en la segunda década del siglo XXI, acaso aferrados algunos juristas todavía a la corriente jurídica del ius-

positivismo, en un reduccionismo peligroso de la ciencia jurídica acotado sólo al texto legal nacional, hay quienes sostienen todavía que la DUDH no es un documento vinculante con pleno valor jurídico, pese a contener obligaciones morales y éticas de todos los Estados del orbe frente a sus ciudadanos y habitantes en general; ello, junto con la discusión casi permanente de si estos son o no derechos sociales exigibles al Estado. Nosotros estemos ciertos de que el ingrediente moral es incluso una categoría superior a la ley, porque la moral no necesita ni de preceptos ni de jueces para alcanzar a distinguir el bien del mal. No obstante, consideramos que tales posturas negativas adoptadas son improcedentes, analizadas a la luz de tres principios jurídicos: el de la buena fe, en que se funda todo sistema normativo jurídico; el de interpretación pro persona, consagrado en el segundo párrafo del artículo 1º de la CPEUM; y del principio de convencionalidad, en base a criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocen la jerarquía de los tratados internacionales en base al párrafo primero del citado artículo 1º de la CPEUM, porque es innegable que la DUDH es fuente y basamento de las normativas internacionales de derechos humanos existentes en el planeta, clave de la fuerza moral en que se respaldan los convenios de la seguridad social contemporánea.

- Así entonces, queda ya perfectamente claro, bajo tal argumentación, que el servicio público de la seguridad social lo debe otorgar el Estado a todos sus habitantes y no sólo a los empleados subordinados u otros grupos sociales productivos, al ser, en razón de su propia naturaleza intrínseca, un derecho humano esencial que es de todos sin distinción —bebés, niños, ancianos, enfermos, discapacitados, amas de casa, etc.—, que es inherente a nuestra propia condición y naturaleza humanas. Y más claro lo es todavía si el Estado es realmente democrático, porque en la dura realidad —la que suele ser más sabia y más veloz que el Derecho—, la democracia no significa nada más “el gobierno del pueblo” (*sic*), como etimológicamente se ha creído, sino más bien es el gobierno en nombre del pueblo, porque el ejercicio del poder por las autoridades que del pueblo obtiene el gobernante democrático.

co, lo ejerce y efectúa en la práctica a través de decisiones que no necesariamente “interpretan” lo que la población piensa, sino que actúa en base a lo que el gobernante considera más benéfico para el propio pueblo. Y es esto es clave que lo comprendan siempre tanto gobernantes como gobernados, que habrá que saber elegir pues para eso son las elecciones y la importancia de nuestro voto en democracia.

- Hablamos entonces, aparte de un complejo cuanto poco explorado tema jurídico, de la enorme fuerza moral de la DUDH, un asunto que acaso por distorsiones en nuestra educación jurídica seguimos cultivando como si las sociedades y el pensamiento no evolucionaran y las ideas no se innovaran constantemente. Después de todo, recordémoslo, la ley no lo es todo y por ello es una falacia que estudiemos “la carrera de leyes”, porque la ley es una de las diversas expresiones de la ciencia jurídica —la más conocida sin duda, pero no la única—, pues están otras expresiones más de la ciencia del Derecho tales como: la doctrina jurídica, los principios generales del Derecho, la jurisprudencia entendidos como criterios legítimos de interpretación sistemática de la normatividad vigente e inclusive, el propio Derecho Internacional en la materia específica de la seguridad social —amén de la figura jurídica de la costumbre internacional en esta temática específica de los derechos humanos—. Por todo ello es que el Derecho es una ciencia, metódicamente y sistemáticamente estructurada, siendo un grave error considerar por simples prejuicios como más trascendentes e importantes a las llamadas “ciencias duras” (sic), por sobre las ciencias sociales de cuyo elenco forma parte la ciencia jurídica.
- Lo anterior cobra sentido particularmente cuando analizamos con serenidad y objetividad la opinión experta de doctrinistas reconocidos pues, partiendo de la idea que si de inicio la DUDH fue aprobada apenas por medio centenar de países en 1948, su evolución ha sido impresionante hasta el punto de que, con citarla, le tocaría a la autoridad buscar cuál de los tratados, convenios o pactos, es aplicable al caso concreto planteado.

Al punto, el insigne tratadista uruguayo Héctor Gros Espiell, en un ensayo que elaboró para conmemorar el Cincuentenario de la aludida DUDH—y también de la «Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre»—, y en lo que ahora más nos importa destacar, es que la DUDH: “...ya está hoy citada e intocada en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, Tribunal que la ha entendido y valorado como inviolable e inobservable por ningún país o individuo del planeta...” Por lo tanto, dicha Declaración Universal es ya fuente de Derecho Internacional en materia de los derechos humanos.

- Sin embargo, qué razón tenía Norberto Bobbio cuando afirmaba al respecto que: “(...) el problema de fondo relativo a los derechos humanos, no es hoy tanto el justificarlos como el protegerlos”. Porque justificados están los derechos humanos por multiplicidad de razones, y lo están no a raíz de la DUDH, ni tampoco de la «Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano» de 1789, sino que datan desde los tiempos más remotos de la humanidad a partir de la imperiosa necesidad de los seres humanos de hacer grupo para protegerse mejor y cuidarse entre todos, volviéndose así seres gregarios; por lo mismo protegerlos es otra cosa, y lo que más importa hoy en día es proteger a los derechos humanos de la irracionalidad de quienes, en ejercicio del poder soberano que les concede el sistema jurídico vigente de sus respectivos países, en su correspondiente tramo de responsabilidades, abusan de su privilegiada posición en la toma de decisiones sin sentirse siquiera responsable de los trágicos resultados por la legitimación ética, moral y jurídica que significa la DUDH en estos tiempos de globalidad en todos los órdenes. Olvidan, o mejor dicho fingen hacerlo, porque piensan que la ley no lo prohíbe, puede y debe prohibirlo la honestidad; por ello, a pesar de sus furibundos críticos, o de las criminales acciones de los tiranos y caudillos populistas que nunca faltan en la escena cotidiana —o de los pocos países que por cuestiones religiosas más bien contemplan las obligaciones del ciudadano hacia el Estado por sobre los derechos humanos naturales—, sucede que en el planeta entero lo políticamente correcto es, guste o no, la observancia plena de

los derechos humanos, poniéndose al fin a los individuos en primer plano y por sobre simples decisiones políticas o económicas.

- Y con respecto de los alcances de la multicitada DUDH, nos interesa sobremanera hacer especial énfasis en la juridicidad de la misma, y desde luego no somos pocos quienes así pensamos. Por ejemplo, el insigne profesor uruguayo Héctor Gros nos da un dato —ignorado por la mayoría de juristas—, que es de vital importancia jurídica considerar, porque si bien es verdad que de origen tal documento no es una Resolución propiamente dicha sino una Recomendación atento a los cánones del Derecho Internacional, lo cierto es que fija una pauta moral y política incuestionable, que sirve para introducirse luego en las normatividades propias y expandir así los horizontes progresistas. Al respecto, el propio Gros Espiell razona y argumenta de manera impecable e implacable:

La Declaración Universal se adoptó mediante una decisión en forma de resolución. Y resoluciones de la Asamblea General (de la ONU) son recomendaciones. Fue tomada por la Asamblea General en París el 10 de diciembre del '48. No hay que caer en el error tan común, incluso de alto nivel técnico, de decir: 'el país tal es signatario de la Declaración Universal'. Esto es un disparate jurídico. No hay ningún país signatario de la Declaración Universal, que se adoptó por votación. Y no con unanimidad, ya que tuvo seis abstenciones. ¿Por qué no se adoptó por unanimidad la Declaración Universal? No se adoptó por unanimidad porque se había rechazado, en el proceso de elaboración de la Declaración, la propuesta de incluir el derecho a la libre determinación de los pueblos. Por esta razón, la Unión Soviética y todos los países comunistas de Europa Oriental y Central se abstuvieron. Además Arabia Saudita por razones distintas participó con su voto negativo. Pero es curiosísimo y es uno de los más interesantes ejemplos que se pueden dar en Derecho

Internacional, de cómo en un plazo relativamente breve, la Declaración Universal pasó de ser un mero ideal común, una pauta política y moral, a ser una fuente de obligaciones jurídicas exigibles.

- Así las cosas, al amparo del principio pro persona, en el caso de la aplicación más favorable al gobernado que establece el segundo párrafo del artículo 1º de nuestra CPEUM, resulta imposible ignorar el catálogo de derechos humanos y sociales —que es de todos y para todos—, contenido en la DUDH; porque tan solo veinte años después de su aprobación, en la «Conferencia de Teherán sobre Derechos Humanos» de 1968, contándose ya con la presencia de ciento veinte países Estados Miembros de la ONU, se declaró por unanimidad y sin ningún voto en contra ni abstención, que la Declaración Universal constituía ya un instrumento internacional obligatorio para todos los Estados Miembros de la Comunidad Internacional. Y luego, en la «Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos» celebrada en Viena en 1993, vuelve la comunidad internacional, integrada ya por 185 Estados Miembros de Naciones Unidas, a declarar por unanimidad y por aclamación, el que la DUDH es fuente de obligaciones jurídicas 'estrictu sensu', esto es, fuente de Derecho Internacional en estricto sentido.

En resumen, la DUDH es fuente formal de la ciencia del Derecho por ser de manera explícita la fuente primaria de todos los Pactos, Convenios o Tratados en materia de los Derechos Humanos que hay en el mundo, acorde a una armónica interpretación de lo establecido en el artículo 28 del propio «Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas».

Así las cosas, por su esencia y fuerza moral, por su importancia y trascendencia en la vida de los más de siete mil millones de habitantes de este planeta, la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» o DUDH, es diariamente el documento más consultado, citado y traducido del orbe.

Su trascendente contenido describen los derechos planetarios individual y socialmente más legitimados y, ateniéndonos al texto de la DUDH, en lo que ahora más nos interesa resaltar, extraemos una conclusión jurídica a la que enseguida nos referiremos puntualmente: pues hay una obligación inexcusable de todos los países de brindar el servicio público de la seguridad social a la población entera y no sólo a los trabajadores subordinados, interpretando de forma correcta y objetivados preceptos clave de la DUDH que ya transcribimos al inicio de este apartado: el artículo 22 (que le establece como un servicio público al cargo del Estado), y el artículo 25 (que describe pormenorizadamente su contenido teleológico), sirviendo este último precepto, además, como marco referencial para el Convenio I02 “Norma Mínima de la Seguridad Social”, emanado de la OIT.

Lo que sin duda confirma pues la obligación inherente del Estado en esta materia, tratándose de una obligación innegable, irrecusable y permanente de dicho Estado nacional, y sin que sobre añadir al punto que ningún país puede ignorar su responsabilidad originaria e inexcusable, y no se puede condicionara las posibilidades económicas, debido a que la observancia y el respeto pleno a un derecho humano —como lo es la seguridad social en el caso que nos ocupa—, no puede ni debe quedar supeditado a la capacidad económica del sujeto obligado como lo es el Estado, atento al texto del artículo 28 de la policitada DUDH.

3. EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU PECULIAR BASAMENTO EN MÉXICO

Muy brevemente debemos establecer aquí que el Derecho de la Seguridad Social en México no sólo es una de las disciplinas ju-

rídicas menos exploradas, sino también es víctima de la apatía e indiferencia en prácticamente todos los sectores de la población, acaso por el deficiente proceso de la enseñanza/aprendizaje de la disciplina y además por un tema cultural que es común en Iberoamérica entera.

Porque si hiciéramos una encuesta nacional entre los juristas, nos daríamos cuenta de que en México ni siquiera el uno por ciento del gremio de Abogados o Licenciados en Derecho —que ascienden a poco más de 342 mil juristas, según datos del INEGI y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo consolidada al primer trimestre de 2016—, cultiva el Derecho de la Seguridad Social, el que por simples prejuicios y alno comprender su grandiosidad, suele asociársele todavía, por razones de origen en nuestro país, como un simple apéndice del Derecho del Trabajo, toda vez que históricamente su basamento se localiza en la fracción XXIX del artículo 123 de la CPEUM, único artículo ubicado en el Título VI: “Del Trabajo y la Previsión Social”, lo cual, como no son ni significan lo mismo los conceptos “seguridad social” y “previsión social”, han provocado siempre enormes confusiones conceptuales, porque entonces, entre los años 1916 y 1917 en que se construye la CPEUM, nuestro Constituyente Originario desconocía la seguridad social como un sistema protector y los puntos finos en cómo operaba en Alemania en 1889 el denominado Seguro Social —el que tampoco es lo mismo que el complejo cuanto filosófico concepto de “seguridad social”—, siendo aquél el instrumento jurídico de origen creado por el Estado alemán originalmente para proteger de mejor manera a las tropas alemanas y a sus familias.

Empero, fue tal el éxito obtenido por Bismarck, que la evolución del Seguro Social hubo de adaptarse y con voluntad política y altitud de miras transformarse en un sistema protector nacional, sobre todo cuando se forja, a mediados de los años

cuarenta del siglo XX, un nuevo modelo de nación donde existe una organización coordinada de gobernantes y gobernados que atienden ya los derechos sociales fundamentales de la población, en lo que se dio en llamar en las ciencias sociales y económicas como Estado de Bienestar, el cual hoy día lamentablemente los jóvenes millennials no terminan todavía de comprenderlo.

Cierto, acerca de este tema en específico hay mucho que decir todavía, pero harían faltan libros enteros para explicarlo. Sin embargo, visto todo en perspectiva y a un siglo de distancia de la promulgación de nuestra CPEUM, sucede que hoy día se efectúan a nuestro mítico artículo 123 reformas laborales – generalmente llamadas estructurales, aunque en realidad no lo son–, y se concluye que en materia de la seguridad social todavía hay desconocimiento del tema y por ende no existe la voluntad política necesaria para efectuarlas.

Añadimos que una verdadera pena que en el país donde se dio tanto lustre a los Derechos Sociales al ubicárseles en el texto mismo de nuestra Carta Magna, en los artículos 3º, 27 y 123 (recordemos que el tema educativo, agrario, laboral y de seguridad social, forman parte del elenco de los Derechos Sociales), se intenten reformas para avanzar en materia educativa o se efectúen una veintena de reformas en materia agraria –no necesariamente para bien de nuestros campesinos–; pero en lo que aquí más interesa resaltar, es que las pocas reformas efectuadas en materia de seguridad social, sean antes y ahora tan cuestionables y cuestionadas, dejándose intocado el que es el mayor problema de fondo: su frágil e impreciso basamento Constitucional en México.

Ello es así, porque la actual seguridad social contemporánea de la segunda década del siglo XXI, la que por cierto no es la de Otto Von Bismarck creada en la Alemania de finales del siglo XIX que está atada al empleo formal y por ende es cubierto su coste por aportaciones seudo fiscales de patrones y obreros

que, si atendemos a nuestra CPEUM, en realidad son de origen cuotas gremiales al cargo de patrones y trabajadores, ya que están fundadas en la fracción XXIX o XII del Apartado A del artículo 123 y no en la fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta Fundamental. Así como tampoco es la genuina seguridad social, costeadada por todos y pensada para todos, de William H. Beveridge, creada en la Inglaterra de los años cuarenta del siglo XX y cubierto su coste vía impuestos generales.

Porque lo sepamos o no, la seguridad social contemporánea tiene, a lo largo y ancho del planeta entero, al menos tres características que le distinguen y a su vez le diferencian de otros sistemas o componentes de la protección social genérica nacional, a saber:

1) Es un derecho humano inalienable, irrenunciable e inextinguible de toda persona humana, por el simple hecho de serlo;

2) Es un servicio público originariamente al cargo de Estado —más allá de que en su gestión participen empresas privadas con afanes de lucro—, por lo cual el Estado nacional es su garante primario y final de este sistema en el país; y,

3) Es también un derecho social exigible al propio Estado, así intervengan en su instrumentación empresas privadas con fines lucrativos como las AFORE's.

Debido a todo ello resultó necesario e idóneo que se plasmasen también en los propios textos constitucionales de los diferentes países del mundo, el servicio público de la seguridad social, provocándose un intenso proceso formativo de la llamada constitucionalización de la seguridad social y, como consecuencia lógica, dando lugar al surgimiento del Derecho de la Seguridad Social entendido ya como una disciplina autónoma, desligada —aunque con alguna vinculación de origen— con el Derecho del Trabajo debido a que son precisamente los patronos asegurados y sus empleados subordinados quienes tienen acceso obligatorio a este sistema protector en Iberoamérica, máxime

cuando en México, por simples cuestiones de origen, están todavía ineluctablemente vinculados.

Y siguen todavía vinculados, muy a pesar de que las tendencias mundiales en esta época de desempleo abierto y relaciones laborales precarias es muy clara: deslaborar de una buena vez a la seguridad social, pues tanto empleados o trabajadores autónomos, niños o ancianos, sujetos productivos o no, al ser un derecho humano todos tienen pleno derecho de acceso no tan sólo a la seguridad social, sino al seguro social, atento a lo previsto por el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Entonces, la gran pregunta a formular aquí es si nuestros gobernantes, legisladores y jueces lo saben y lo entienden a cabalidad o no.

Porque en el inobjetable contexto planteado, la pregunta acertada a realizar sería, por una parte, si en verdad están dispuestos los gobernantes a cumplir con tales compromisos y, por la otra parte, si nosotros los gobernados estamos realmente dispuestos a exigir su cabal y oportuno cumplimiento ante tribunales nacionales e internacionales, convencidos de que se trata de exigir no otra cosa que nuestros propios derechos humanos inalienables, irrenunciables e inextinguible; máxime cuando en el texto de nuestra CPEUM y las Constituciones Iberoamericanas, se encuentra consagrado el derecho de acceso a la seguridad social, el que por cierto, debemos insistir, contrario a lo que la mayoría suponen, no puede constreñirse sólo a los trabajadores subordinados sino ampliarse a toda la población, por lo cual urgiría deslaborar ya la seguridad social del siglo XXI.

Botones de muestra de este imparable proceso de constitucionalización de la seguridad social lo hay en todas partes de Iberoamérica. Eso explica por qué todas las Constituciones Políticas contemplan, en uno o más de sus preceptos, la manera en

que cada país de la región ha diseñado puntualmente este servicio público fundamental para la dignidad de vida de la ciudadanía, por cierto haciéndolas todas ellas de manera diferenciada, siempre acorde a su particular historia, tradición, idiosincrasia, economía e ideología de gobierno imperante.

Analizadas esas distintas maneras de concebir desde la constitución nacional este servicio público de la seguridad social, nos encontramos por ejemplo que:

- El artículo 41 de la Constitución Política Española señala textual que los poderes públicos mantendrán un régimen de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
- El artículo 86 de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, delinea una serie de contingencias socio vitales de la seguridad social que otras Cartas Magnas no tienen, estableciendo en su texto al Estado como el único rector responsable y garante del sistema, sin dar oportunidad a que entes privados intervengan en su prestación y, en especial, resaltando que la ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección.
- El artículo 40 de la Constitución Política de la República de Colombia, señala que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, pero con la participación de los particulares, y en aras de ampliar progresivamente la cobertura, la seguridad social comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley, aunque sin definir cuáles serán las prestaciones que la integren, descollando de forma expresa señale que este servicio podrá ser prestada por entidades públicas o privadas atento siempre a la ley.

- Los artículos 194 y 195 de la Constitución de la República Federativa del Brasil establecen que la seguridad social comprende un conjunto integrado de acciones de iniciativa de los poderes públicos y de la sociedad, destinadas a asegurar los derechos relativos a la salud, a la previsión y a la asistencia social, correspondiendo al Poder Público organizar la seguridad social que será financiada por toda la sociedad, de forma directa e indirecta, en los términos de la ley, mediante recursos provenientes de los presupuestos de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, y de aportaciones sociales de los trabajadores, empleadores y sobre los ingresos de apuestas.
- El artículo 73 de la Constitución de Costa Rica, establece sólo seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, pero no crea un sistema de seguridad social, enunciándose las contingencias protegidas y estableciendo que los seguros contra riesgos profesionales serán por cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales.
- El artículo 18 de la Constitución de Chile, establece que las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado, que la acción del Estado garantizará a todos los habitantes prestaciones básicas uniformes —sea que se otorguen por instituciones públicas o privadas—, que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias, y que el Estado supervigilará (sic) el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social.
- El artículo 60 de la Constitución de la República Dominicana, señala que toda persona tiene derecho a la seguridad social, y que el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez, dejando al artículo 61 el derecho a la salud integral al parecer como parte de la protección social genérica costeadá vía impuestos generales.
- Los artículos del 10 al 12 de la Constitución Política del Perú, reconocen el derecho de acceso a la seguridad social para

la protección frente a contingencias y elevación de la calidad de vida, garantizando el Estado el libre acceso a prestaciones de salud y pensiones, siendo el administrador el Gobierno nacional de los fondos a cargo del Estado, y señalando además que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles y deben aplicarse en la forma en que la ley de señala.

- Y para terminar este breve comparativo, el legendario cuanto mítico artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Apartado A, fracción XXIX señala textual que: “es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y que ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.” Sin embargo, no hace ninguna referencia a un sistema de seguridad social propiamente dicho.

De lo antes apuntado se demuestra que en todas las Constituciones Políticas Iberoamericanas, si bien en diversas formas e intensidades, se encuentra consagrado el derecho de acceso al servicio público de la seguridad social y por supuesto el basamento de los seguros sociales, que son, a la par, precedente e instrumento de la seguridad social contemporánea del siglo XXI; un servicio público que consideramos fundamental para la población por múltiples razones y que urge rescatar y redefinirle a fin de dotarle de nuevos contenidos acordes a la dura realidad y los enormes desafíos que nos presenta el siglo XXI.

4. BREVES CONCLUSIONES

A manera de colofón de lo antes argumentado, el constitucionalismo de la seguridad social es un hecho que debe ser incuestionable, producto del significativo avance jurídico legislativo y cultural de la segunda mitad del siglo XX y de la acción propulsora y expansiva de la DUDH de Naciones Unidas, la cual contempla en dos de sus preceptos, por su magnificencia, la obligación del Estado nacional de otorgar este servicio público y, consecuentemente, el pleno derecho de acceso de todos los individuos a dicho manto protector social.

Porque al ser el sistema nacional de seguridad social un redistribuidor natural del ingreso, todos los países del planeta, velada o abiertamente, buscan en ella el financiamiento que impulse y guíe a la protección social genérica, prefiriéndole incluso —porque la seguridad social nos cuida desde que somos concebidos hasta después de nuestra muerte, a través de las pensiones—, por sobre los otros componentes de ésta, tales como el asistencialismo social, siempre discrecional y sufragado vía impuestos generales; y también por sobre la previsión social laboral clásica, en un mundo de desempleo abierto y precario, donde la informalidad laboral cobra ya una relevancia inusitada económica nunca antes vista.

Así las cosas, su “deslaboralización” es ya inevitable al ser la auto ocupación o trabajo autónomo, en buena medida, el futuro del mundo trabajo tras irse para siempre y sin retorno la época del denominado “pleno empleo”.

Por eso afirmamos categóricamente que si la seguridad social no existiera, habría que inventarla, y si la que tenemos no nos sirve como debería hacerlo, entonces habrá que reinventarla.

No vemos en el horizonte, como cultores e investigadores de esta humana cuanto ignorada disciplina jurídica desde hace cuatro décadas, otra salida digna posible al complicado dilema existencial de la seguridad social contemporánea, pues más que un gasto es una inversión en lo mejor que tiene un país, que es su gente, y porque además, estamos convencidos con hechos duros que es falsa la tesis economicista de que la seguridad social sea ya in financiante en el siglo XXI. ¡Pues eso!